

San Miguel, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos antecedentes RIT O-297-2022, sobre despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido en procedimiento de aplicación general, caratulados “San Martín/Corporación Municipal”, mediante sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, se rechazó la demanda interpuesta por los señores Guillermo Alexis Muñoz Pino y Nelson Marcelo San Martín Arriagada, en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, representada legalmente por don Gustavo Alejandro Ruz Muñoz, declarándose que entre las partes no ha existido relación laboral.

En contra de dicha sentencia los abogados Marco Beltrán Venegas y Franco Jeria Cárcamo, ambos actuando en representación de los demandantes, interpusieron recurso de nulidad, invocando como causal principal para sustentarlo la contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, fundada en la omisión de los requisitos contemplados en el numeral 4° del artículo 459 del estatuto laboral.

En subsidio, esgrimen la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Por resolución de 24 de octubre de 2022, se declaró admisible el recurso de nulidad por las causales precedentemente señaladas y el 28 de diciembre de ese año Tribunal Constitucional comunicó la suspensión del procedimiento habida cuenta de un recurso de inaplicabilidad formulado por el demandante, dejándose sin efecto la aludida suspensión, recién el 20 de octubre de este año.

En la audiencia del 10 de noviembre último, tuvo lugar la vista del recurso.

Con lo oído y considerando:

I.- En cuanto a la causal principal:

Primero: Que, como se ha señalado, la causal invocada como principal es la contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es la omisión en la sentencia del análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta decisión, requisitos exigidos por el numeral 4° del artículo 459 del



mismo código. Para sustentar este motivo de invalidación indica que, de la sola lectura de la sentencia recurrida, se desprende, sin necesidad de un mayor estudio, que el sentenciador no dedica línea alguna referida al análisis de las pruebas ofrecidas por esta parte, y las introducidas por la propia demandada, las cuales resultaban del todo pertinentes para la teoría del caso de esta parte demandante, solo se limita a enunciarlas, transcribirlas, más no valorarlas.

Indican que en la absolución de posiciones realizada por la demandada, ésta realizó una aseveración, que debería haber sido analizada por el sentenciador, en la referida sentencia, esto es, ante la pregunta al absolvente de *“si era efectivo que los actores estaban contratados bajo el Código del Trabajo”*, el absolvente señaló *“sí, es efectivo”*.

Añaden que su parte alegó que los actores fueron contratados bajo el estatuto del Código del Trabajo y no como los profesionales de la salud que se desempeñan en los centros de salud contratados por modalidad de contratos APS, desechando así, la tesis de la parte demandada que sostiene que en la Corporación de Salud Municipal existiría una forma única y exclusiva de contratación para todos, y sería la modalidad del contrato APS (para profesionales de la salud) sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, tal como lo afirmó en su escrito de contestación y los testimonios de la demandada.

El recurso da cuenta que, para cada uno de los hechos a probar se rindió prueba que guarda directa relación con la tesis enarbolada por esta parte demandante, pero de la lectura de la sentencia no se aprecia que el sentenciador hubiese relacionado los hechos que el tribunal estableció y que debían probarse, con la prueba rendida por las partes. A continuación, se refieren a la prueba acompañada por los actores, como son los correos electrónicos, cartas, set de liquidación de remuneraciones, acta de entrega de computador, certificado de cotizaciones AFP Cuprum y Provida, copia de comunicación de término de contrato de trabajo, credenciales, entre otros.

Acusan la omisión de la valoración de la declaración de dos testigos, Carlos Carrasco Jiménez y Milton Cabrera Álvarez ni la prueba de la demandada.



Finalmente señalan que la infracción denunciada ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada, por cuanto si se hubiera dado correcta aplicación a los indicados preceptos legales y a las alegaciones de las partes y prueba incorporada al proceso, se habría acogido la demanda, con expresa condena en costas.

Segundo: Que de la lectura del fallo censurado, se advierte que en el fundamento tercero, se hace mención a todos los medios de prueba aportados por las partes, transcribiendo parte de las declaraciones de los testigos y absolución de posiciones.

En la reflexión quinta, se exponen los argumentos por los cuales el Tribunal *a quo* descarta la existencia de una relación laboral entre los actores y la corporación demandada, señalando al efecto que ambos actores se desempeñaban en el servicio de salud, dependiente de la Corporación Municipal de Educación y Salud, hecho que esta última tampoco negó. Luego la sentencia pasa a analizar la Ley N° 19.378 que establece el "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal", su régimen laboral y causales de término.

En el basamento sexto, indica que *“...de acuerdo a lo previsto en la ley 19.378, el sistema contemplado para el personal que forma parte de la dotación de establecimientos municipales de atención primaria de salud, permite la contratación de funcionarios con contrato indefinido, diferenciándolos de los funcionarios con contrato a plazo fijo, en tanto estos últimos no ingresan a través de un concurso público de antecedentes, razón por la cual no pueden acceder a la carrera funcionaria ni gozan de estabilidad en el empleo, toda vez que prestan funciones por periodos iguales o inferiores a un año calendario.*

En el caso de los actores, ambos sostuvieron en sus libelos que habrían sido contratados en virtud de un contrato que duraría hasta diciembre de 2022.

En este orden de ideas, tratándose de personal contratado a plazo fijo, el ingreso al sistema lo es por un período limitado de tiempo, lo que no permite establecer que su contrato nunca tuvo la naturaleza de indefinido, por lo que no han tenido acceso a la estabilidad en el empleo y a una carrera funcionaria, pues si así fuere se estaría vulnerando la ley, la que establece que para el ingreso de funcionarios con contrato indefinido



se requiere de un concurso público de antecedentes. Pensar de manera diferente implicaría que una persona contratada a plazo fijo, pudiese alcanzar una situación o condición estatutaria pasando por encima de los requisitos previstos por el legislador para ello, oponiéndose al sistema de conformación de la dotación de la ley 19.378, y configurándose respecto de él una situación de privilegio que importa discriminación respecto de candidatos que postulen a funciones con contrato indefinido, contando con los antecedentes necesarios que un concurso público exige, de lo que se sigue que quienes postulan no estarían en igualdad de condiciones con aquellos funcionarios que, desde un comienzo, sabían perfectamente que su contrato tenían una fecha de término, no más allá del 32 de diciembre de 2022 en caso de los actores, tal como lo sostuvieron en su libelo.” En seguida, en la sentencia se citan fallos de la Excm. Corte Suprema en el sentido que no resulta procedente aplicar la normativa del derecho común que permite transformar contratos a plazo fijo en indefinidos bajo ciertas circunstancias, puesto que, como se ha dicho, ello se opone al sistema de conformación de la dotación prevista por la ley 19.378.

Concluye el juez que no nos encontramos frente a una relación regida por el Código del Trabajo, por lo que tampoco resulta aplicable la figura del despido indirecto invocada por los demandantes para poner término al vínculo que los unió con el municipio demandado.

Tercero: En consecuencia, la prueba fue examinada por el juzgador, la decisión contiene los razonamientos que le eran exigibles, evidenciándose en el recurso que lo que reprocha son las consideraciones insatisfactorias a los intereses de su parte, quien podrá discrepar de la justificación que el tribunal da a su decisión, sin embargo, ello no basta para desconocerlo o anularlo. En definitiva lo que se extraña por el recurrente, es la ponderación de las pruebas rendidas en el proceso y, que a su entender, hubieran llevado al juzgador a dar por asentados los hechos en los que precisamente se construye su demanda, desconociendo que el fallo impugnado contiene las motivaciones en virtud de la prueba rendida que le eran exigibles y que la recurrente extraña, desde que luego de un lógico análisis en la construcción de la resolución en examen, ha culminado decidiendo de la manera propuesta, cumpliendo con el requisito del numeral 4º del artículo 456 del estatuto antes citado.



De otra parte, en el considerando octavo el sentenciador argumentó lo que sigue: *“las declaraciones de los testigos, así como de los absolventes de ambas partes, en nada alteran lo razonado, porque se trata de una controversia relativa a la interpretación y aplicación de la ley, tomando en consideración que no se negó que los actores fueron contratados para la Corporación Municipal de Educación y Salud, sin embargo, se ha arribado a la conclusión que sus contratos, así hayan sido escriturados, de acuerdo a la ley de APS, no se rigen por el Código del Trabajo, sino por el estatuto especial al que se ha hecho referencia en este fallo; más allá de lo acertado o no de este raciocinio, lo cierto es que explicitó por qué no lo hacía.*

Con todo, ha de señalarse, que la causal invocada -478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo- tiene que ver con la omisión de un requisito formal, vale decir, con un reproche de procedimiento, estructural y no de contenido, por lo que el recurso de nulidad por esta causal ha de ser desestimada y siempre teniendo en cuenta que en el inciso tercero del artículo 478 del Código Laboral se expresa que no producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, cuyo es el caso de autos.

II.- Respecto de la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo:

Cuarto: Que, en subsidio los demandantes, para sustentar su arbitrio procesal, invocan la causal del artículo 477 del estatuto laboral, pues estiman que la sentencia se dictó con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo de ella, esgrimiendo una contravención formal al artículo 1° inciso segundo y tercero, artículos 171 inciso primero, 160 N° 7 del Código del Trabajo y 24 del Código Civil; artículo 4° de la Ley N° 19.378 y Ley N° 18.883.

Sostienen que no se aplicó correctamente la ley toda vez que el según lo preceptuado por el artículo 1° inciso tercero del Código del Trabajo Código del Trabajo, se otorga la posibilidad de que se aplique supletoriamente éste, en caso de que estatutos especiales no regulen ciertas materias; como sería el caso del termino indirecto de un contrato regido por Código del Trabajo sujeto al estatuto administrativo de atención



primaria de salud municipal, por incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato y que tiene el empleador Estado.

Añaden que considerando que la prueba ofrecida aclara que se trataba de una relación laboral informal, ya que se dan todos los presupuestos de prestación de servicios bajo subordinación y dependencia, además de los incumplimientos que cualquier empleador debe evitar para no incumplir sus obligaciones, de lo contrario el Estado estaría aprovechándose de su propio “error o negligencia” para afectar a sus trabajadores funcionarios, e incluso generando un enriquecimiento sin causa al no enterar las remuneraciones ni pagar las cotizaciones previsionales que corresponde por los servicios efectivamente prestados por los actores.

Indican que en el Estatuto de Atención Primaria de Salud existen tres formas de contratación de personal, la primera por contrato APS o de Atención Primaria de Salud, la segunda bajo la modalidad de Contrato a Honorarios y la tercera regida por el Código del Trabajo, por lo que estar sujeto al estatuto APS y estar contratado por contrato APS son cosas relacionadas, pero distintas.

Refieren que en ninguna de estas disposiciones está regulado una figura similar al despido indirecto, por lo que cabe aplicar la legislación más similar al caso que debe resolver el juez, que en este caso sería claramente el Código del Trabajo, que establece esta figura en el artículo 171 en relación a las causales del artículo 160 n° 1, 5 y 7 de dicho cuerpo legal, para el caso de autos la aplicación de la causal del artículo 160 n° 7 del código del ramo la que fue motivo de la carta de despido indirecto ejecutada por los demandantes, esto en virtud de no habérseles pagado remuneración del mes de marzo del año 2022 y los días trabajados en el mes abril del año 2022, con el correspondiente pago de las cotizaciones previsionales, las que no se encontraban pagadas al momento del despido indirecto y no solamente el hecho de no habérseles escriturado el contrato, que aun estando sujetos a un estatuto especial está regulado y regido por las normas del Código del Trabajo, en especial las formas de poner término a éste como sanción tanto del empleador como la indirecta del trabajador.



Quinto: Que, como reiteradamente han sostenido la doctrina y la jurisprudencia, las maneras de infringir la ley son contraviniéndola formalmente, interpretándola erróneamente o haciendo una falsa aplicación de la misma. Hay contravención formal de una ley cuando la sentencia impugnada está en oposición directa con el texto expreso de aquella; se la interpreta erróneamente cuando el sentenciador, al aplicarla a un caso concreto, le da un sentido o alcance distinto de aquel que prevé, y se la aplica falsamente cuando se la impone a casos no regulados por ella o bien se prescinde de su aplicación en aquellas situaciones para las que fue dictada.

Sexto; Que, de lo resuelto por el tribunal del mérito, no aprecia esta Corte la infracción de ley que el recurrente esgrime, desde que el artículo 48 de la Ley N°19.378, que Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal establece: “ *Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se podrá retener la renuncia, por un plazo de hasta treinta días, contado desde su presentación, cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución; b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario; c) Vencimiento del plazo del contrato; d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación con la función que desempeñen en un establecimiento municipal de atención primaria de salud; e) Fallecimiento;*

f) Calificación en lista de Eliminación o, en su caso, en lista Condicional, por dos períodos consecutivos o tres acumulados; g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883; h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse condenado por crimen o simple delito, con sentencia ejecutoriada, e i) Disminución o



modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley. ..”.

Luego, los demandantes, regidos por un estatuto especial de los funcionarios de la atención primaria de salud, no pueden invocar en su beneficio normas que son ajenas a dicho régimen estatutario y que se encuentran contenidas en el Código del Trabajo para pretender justificar su decisión de emplear el despido indirecto para poner término a su relación laboral con la Corporación de Desarrollo Social de San Bernardo.

Séptimo: Que de lo que se ha venido razonando, resulta forzoso concluir que la sentencia impugnada no incurrió en los errores de derecho que se denuncian por los recurrentes, al haber aplicado correctamente la normativa que el juez *a quo* precisó era atingente al asunto debatido, lo que conlleva a desestimar el presente libelo de nulidad, también por este motivo subsidiario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en las normas precitadas y en los artículos 479 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en los autos RIT O-297-2022, la que en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Claudia Lazen M.

Nº 557-2022-Laboral-Cobranza.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señoras María Teresa Díaz Zamora, Ana Cienfuegos Barros y Claudia Lazen Manzur. No firma la ministra señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B., Claudia Lazen M. San Miguel, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

En San Miguel, a trece de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

